

Septiembre 30 de 1958

63ª REUNION — 57ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO y BENJAMIN GUZMAN, presidente provisional y vicepresidente 1º del Honorable Senado, respectivamente

Secretarios: señores LUIS ABEL VISCAY y PEDRO OSVALDO SBARRA

Prosecretarios: señores NOE JITRIK y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

---

SECRETARIO DE ESTADO PRESENTE:

de Energía y Combustibles,  
doctor GREGORIO MEIRA

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro  
BAYOL, Augusto G.  
BAZAN, Eduardo  
BERTIN, Alfredo Felipe  
BIAIN, Pablo  
CALDERÓN, Segundo Rosa  
CANEQUE, Francisco E.  
CIARLOTTI, Pedro Antonio  
DAVILA, J. Anibal  
DE LLAMAS, Enrique V.  
DÍAZ, Juan Luis  
FALCO, Clodomiro  
FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio  
FIGUEROA, Héctor E.  
FITTIPALDI, Juan Pablo  
FLEITAS, Víctor Hugo  
GALLO, Victorio Manuel  
GARCIA, Alfredo  
GÓMEZ, Carlos Bernabé  
GUIDO, José María  
GUZMAN, Benjamín  
ITURRALDE, Antonio  
JUÁREZ, José Gregorio  
LEAVY, Napoleón Tomás  
LEBRERO, Carlos Alberto

MALLEVILLE, Julio A.  
MANSILLA, Juan Argentino  
MELANI, Francisco José  
NOGUEIRA, Eduardo  
PARRA PÉREZ, Diego  
PÉREZ, Bartolomé  
RACEDO, Lucio E.  
RICA, Diego Isidro  
ROCHA ERRECART, Adolfo  
SANCHEZ, Franklin Alberto  
TRUNSKY, Salomón  
TURANO, Armando Luis  
VERA BARROS, Pedro César  
VILCHEZ, Martín  
VILLALBA, Lucas  
WEIDMANN, Rodolfo A.

AUSENTE, CON AVISO:

BERTORA, José María Antonio

---

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría. (Página 2364.)

2.—Asuntos entrados:

1.—Mensajes del Poder Ejecutivo:

1.—Presenta proyecto de ley sobre aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional. (Página 2364.)

2.—Presenta proyecto de ley por el que se rectifican los artículos 1º y 2º del decreto ley 8.246/57. (Página 2364.)

3.—Presenta proyecto de ley por el que se aprueba el **convenio comercial y financiero** suscrito entre la República Argentina y el Estado de Israel. (Página 2365.)

## II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 2365.)

3.—Proyecto de ley del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical Intransigente sobre prórroga, hasta el 30 de junio de 1959, de la vigencia de las leyes 14.433 y 14.442. (Página 2388.)

4.—Proyecto de comunicación de los senadores Arana y Rocha Errecart sobre ampliación y dragado del canal de acceso al puerto de San Pedro, Buenos Aires. (Página 2388.)

5.—Proyecto de comunicación del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical Intransigente sobre publicación en el Boletín Oficial, de la ley de prórroga de la vigencia de las leyes 14.433 y 14.442. (Página 2388.)

6.—Proyecto de ley de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública por el que se crean centros regionales de adiestramiento sanitario en las ciudades de Resistencia, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Comodoro Rivadavia. (Página 2388.)

7.—Proyecto de resolución del senador Lebrero sobre prórroga del plazo fijado a la Comisión Especial parlamentaria mixta encargada de estudiar la explotación e industrialización integral del carbón de Río Turbio. (Página 2389.)

8.—Proyecto de ley de los senadores Figueroa, Lebrero y Pittipaldi por el que se crea la Escuela de Salud Pública, con sede en la ciudad de Córdoba. (Página 2390.)

9.—Consideración del despacho de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley, en revisión, sobre creación del fuero del agio. Se aprueba. (Página 2391.)

10.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, en revisión, sobre procedimiento para los casos de agio y especulación. Se aprueba. (Página 2394.)

11.—Consideración de despachos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en proyectos de ley, en revisión, por los que se acuerdan pensiones. Se aprueban. (Página 2398.)

12.—Consideración del despacho de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del senador Racedo por el que se crea el cargo de secretario administrativo en los juzgados nacionales de la Capital Federal. Se aprueba. (Página 2430.)

13.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputa-

dos en el proyecto de ley, enviado en revisión, sobre Dirección Nacional de Turismo. Se aprueba. (Página 2432.)

14.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en los proyectos de ley de varios senadores por los que se acuerdan recursos para la construcción de edificios públicos y subsidios para obras de asociaciones privadas o semipúblicas. Se aprueba. (Página 2433.)

15.—A moción del senador Mansilla se resuelve que la Cámara se constituya en comisión para estudiar dos proyectos de ley, en revisión, por los cuales se refuerza el presupuesto general de la administración nacional, anexo 63, Secretaría de Aeronáutica, para el ejercicio 1957/1958. (Página 2440.)

16.—Conferencia. La Cámara, constituida en comisión, estudia los proyectos de ley a que se refiere el punto anterior. (Página 2440.)

17.—Consideración de los proyectos de ley estudiados por la Cámara constituida en comisión, a que se refieren los puntos 15 y 16 de este sumario. Se aprueban. (Página 2442.)

18.—El senador Cañequé mociona para que la Cámara se constituya en comisión a efectos de estudiar el proyecto de ley de vinos, en revisión. Es rechazada. (Página 2442.)

19.—A moción del senador Melani se pasa a cuarto intermedio. (Página 2443.)

20.—Proyecto de ley del senador Racedo por el que se acuerda pensión a la señora María Luisa Benavidez de Biscardi. (Página 2443.)

21.—A moción del senador García se resuelve que la Cámara se constituya en comisión para estudiar la comunicación de la Honorable Cámara de Diputados referente a la derogación del artículo 28 del decreto ley 6.403/55. (Página 2444.)

22.—Conferencia. La Cámara, constituida en comisión, estudia la comunicación a que se refiere el punto anterior. (Página 2444.)

23.—Consideración de la comunicación a que se refieren los puntos 21 y 22 de este sumario. Se aprueba una moción del senador García por la que el Senado insiste en su sanción anterior, del 28 del corriente. (Página 2446.)

24.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre transferencia del Registro Nacional de Electores y juzgados electorales al anexo «Justicia». Se aprueba. (Página 2446.)

25.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea el «Fondo especial de obras y servicios públicos». Se aprueba. (Página 2455.)

26.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión,

3º Fomentar la salud física, mental y social mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, para:

- 1º El saneamiento del medio.
- 2º El centro de las enfermedades transmisibles.
- 3º La educación de los individuos en la higiene personal.
- 4º La organización de servicios médicos y de enfermerías para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, y
- 5º El desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud.

Y como dice Winslow, de quien extractamos esta definición, «la Salud Pública organiza estos beneficios de modo tal que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a una feliz longevidad».

Por la naturaleza de sus actividades, Salud Pública significa una organización y una estructura en la que debe participar el Estado como órgano normativo, orientador y modelador. Es precisamente en este nivel donde se hace indispensable la presencia de técnicos adiestrados y especializados. Sólo así se puede asegurar la efectividad de una conducción sanitaria dentro del complejo mecanismo de su gestión.

Resulta un lugar común afirmar que Salud Pública, precisada en los términos que en anteriores párrafos se hace referencia, no cuenta en la Argentina con el personal competente que su desarrollo exige. No viene al caso referirse a las causas de este atraso, sino señalar la necesidad de encontrar las vías para subsanarlas.

Es lamentable que la orientación impresa a la enseñanza por las facultades y escuelas de medicina no haya encontrado hasta la fecha el camino de su solución. Con la urgencia del caso, entendemos que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública debe encarar la creación de una Escuela de Salud Pública para mejorar la funcionalidad de los instrumentos sanitarios y asistenciales dependientes del Estado, tanto nacional como provinciales y superar las graves insuficiencias de que adolece la organización técnicoadministrativa de buena parte de los servicios bajo sus respectivas jurisdicciones.

Un proyecto de esta naturaleza significará un positivo progreso para el país. Alrededor de la Escuela de Salud Pública que se propone, deberán desarrollarse cursos especializados para la formación de técnicos en salud pública, médicos higienistas, odontólogos sanitarios e ingenieros sanitarios. Los mismos deberán estar informados del criterio sociológico que implican las respectivas técnicas. La Escuela de Salud Pública, cuya creación se propone a vuestra honorabilidad, deberá también encarar la formación del personal auxiliar que las tareas sanitarias exigen.

La ubicación de dicha escuela no puede ni debe ser extraña a la magnitud de los problemas que debe abordar y permitir por equidistancia, la concurrencia de los diversos profesionales interesados del interior del país, a recibir las enseñanzas que posibiliten su graduación en la administración sanitaria pública. La exigencia primaria de que los profesionales proceden de las mismas zonas más sacudidas por el infortunio y se comprometan a volcar sus afares, una vez capacitados, en esas vastas regiones desposeídas hoy de toda posibilidad de concretar una acción orgánica y sostenida, afianzará el pro-

pósito que guía al gobierno de la Nación a crear la Escuela de Salud Pública del Centro Argentino.

La tradición científica de la Universidad Nacional de Córdoba con más de tres siglos de ininterrumpida colaboración al progreso cultural del país, su ubicación estratégica al concentrar vastos volúmenes demográficos del Norte, Oeste y parte del Sur del territorio, la señalan como la casa de estudios en mejores condiciones para cumplir la iniciativa.

Los nombres de algunos de sus hombres más relevantes y que a justo título han adquirido prestigio internacional, son suficiente garantía de que la Escuela de Salud Pública del Centro Argentino, tendrá dentro de la Universidad de Córdoba, a figuras señeras, enamoradas del bien y del progreso científico, cultural y social de la República.

La dotación, organización y funcionamiento de una escuela sanitaria, plantea problemas de orden técnico, docente y administrativo. En este último aspecto y en particular en el financiero, es deber del Estado, a través de sus organismos específicos, sostener las iniciativas del bien público, con los recursos que ellas demanden, sin lesión o detrimento de la autarquía universitaria, considerando sin duda alguna, como un derecho noblemente conquistado por las altas casas de estudio, para que la función de enseñar y aprender se libere de influencias o gravitaciones extrañas al objetivo que deben cumplir.

Héctor E. Figueroa. — Carlos Alberto Lebrero. — Juan Pablo Fittipaldi.

Sr. Presidente (Guido). — A las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda

§

### CREACION DEL FUERO DEL AGIO

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde tratar el despacho de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión sobre creación de fuero del agio. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Viscay). — (Leyendo):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Interior y Justicia ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados sobre creación del fuero del agio; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, 29 de septiembre de 1958.

Adolfo Rocha Errecart. — Víctor Hugo Fleitas. — José María Guido.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados  
(Septiembre 17 de 1958)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — En la Capital de la República el juzgamiento de las infracciones a las leyes

represivas del agio y la especulación estará a cargo de jueces de agio y especulación y una Cámara de Apelaciones.

Art. 2º — Los jueces de agio y especulación y los miembros de la Cámara de Apelaciones, serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Para ser juez de agio y especulación se requiere ser argentino, mayor de veinticinco años de edad, poseer título de abogado expedido por universidad nacional y haber ejercido tres años, por lo menos, la profesión de abogado o funciones judiciales.

Para ser miembro de la Cámara de Apelaciones se requieren las mismas condiciones, salvo la edad, que será de más de treinta años y el ejercicio profesional o de funciones judiciales que no podrá ser menor de cuatro años.

Art. 3º — Los jueces de agio y especulación prestarán juramento ante la cámara y los miembros de ésta, ante su propio seno.

Art. 4º — Los jueces y miembros de la Cámara de Apelaciones son inamovibles y permanecerán en sus funciones mientras dure su buena conducta. Los emolumentos de los jueces del agio y especulación, miembros de la Cámara de Apelaciones y demás funcionarios serán equiparado a los de igual jerarquía en la jurisdicción nacional.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la designación de los magistrados, funcionarios y empleados del fuero especial del agio y la especulación, se extenderá hasta un término que no excederá de seis meses a contar desde la fecha del vencimiento de la vigencia de las leyes, represivas del agio y la especulación.

Art. 5º — Se designarán 18 jueces de primera instancia y una cámara de apelaciones que se compondrá de 5 miembros. La presidencia de la cámara será ejercida anualmente por cada uno de sus miembros en forma rotativa. La cámara funcionará dividida en 2 salas. Cada sala estará compuesta por el presidente de la cámara y 2 vocales, y hará tribunal con el total de sus miembros, pudiendo actuar con 2 en caso de que no mediare discrepancia.

Art. 6º — La cámara se reunirá en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas entendiera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.

Art. 7º — Los juzgados y la cámara de apelaciones funcionarán durante todos los días hábiles del año, en forma continua y como mínimo 18 horas diarias. Los días sábados, domingos y feriados funcionará un juzgado para entender en las causas de urgencia o en aquellas en las que el infractor se hallare preventivamente detenido.

Art. 8º — Cada juzgado tendrá un secretario que deberá reunir las siguientes condiciones: ser argentino, abogado, escribano o procurador y

mayor de 25 años. La cámara tendrá un secretario que deberá reunir las mismas condiciones.

Art. 9º — La cámara nombrará a su secretario y demás personal. Los secretarios y empleados de primera instancia serán designados por la cámara a propuesta de los respectivos jueces.

Art. 10. — El ministerio público será desempeñado por 3 fiscales, uno para cada turno, que deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los jueces.

Art. 11. — Corresponde al ministerio público, en esta jurisdicción:

- a) Representar y defender los intereses fiscales;
- b) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relacionados con el agio y la especulación;
- c) Ser parte necesaria de todas las causas de agio y especulación, y en las contendas de jurisdicción y competencia.

Habrán, además, 3 defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser jueces, establecidas en el artículo 2º de esta ley.

Art. 12. — La cámara de apelaciones ejercerá superintendencia sobre los jueces de primera instancia, y dictará las normas y reglamentaciones para el mejor funcionamiento del tribunal.

Art. 13. — La cámara de apelaciones llevará un registro de peritos, y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir para su inscripción. Los peritos inscriptos no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo pena de exclusión del registro.

Art. 14. — Los miembros de la cámara de apelaciones, jueces de primera instancia y secretarios, no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado ni ejercer su profesión o cualquier otra actividad vinculada con la misma.

Se exceptúan de la referida prohibición los cargos docentes.

Art. 15. — En los casos de recusación, excusación, licencia u otro impedimento, los jueces se reemplazarán recíprocamente en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 16. — Por esta vez podrán ser secretarios de los juzgados y la cámara de apelaciones de agio y especulación los oficiales primeros de la justicia de la Capital que tengan antigüedad de 5 años, por lo menos, en el desempeño de sus cargos.

Art. 17. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán tomados de rentas generales.

Art. 18. — Deróganse las disposiciones de las leyes 12.830 y 14.440 en cuanto se opongan a la presente.

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.  
Eduardo T. Oliver.

**Sr. Presidente** (Guido). — En consideración.

**Sr. Fleitas.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Fleitas.** — Señor presidente: el agio y la especulación, fenómenos tan antiguos como la historia, constituyen serios factores de perturbación en la economía de los pueblos. Es por eso que la acción represiva del Estado se ha hecho sentir en todos los casos en que aquellos fenómenos hayan significado una amenaza al orden social.

La conciencia ética de todos los pueblos ha condenado como inmoral el enriquecimiento indebido, y con más razón repudia el beneficio injusto que adquieren los especuladores en desmedro de los intereses generales de la colectividad.

Doctrinariamente se ha dicho que agio es todo hecho u omisión especulativa, que realizada con ficción o malicia, produce un beneficio o un interés material mediato o inmediato que pueda lesionar el patrimonio o la salud individual o colectiva.

Con respecto al derecho administrativo, alguien ha definido el agio como la violación de normas que aseguran el bienestar individual o colectivo por hechos u omisiones que afectan mediante la especulación ilícita u oculta la libre circulación o consumo de la riqueza destinada a la satisfacción de la colectividad.

Ha sido preocupación constante de los Estados modernos combatir con medidas restrictivas el incesante aumento del costo de la vida, así como también sancionar el lucro desenfrenado.

Nuestra legislación de fondo contempla algunas medidas relacionadas con este tema. Así, el Código de Comercio prohíbe las operaciones que bajo cualquier forma legítima impliquen un contrato aleatorio de los prohibidos por las leyes. El pago de las deudas de juego está prohibido por el Código Civil, y el Penal, en el capítulo relativo a fraude al comercio y a la industria, reprime el agiotaje con pena de prisión en los siguientes términos: «El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género con el fin de no venderla si no a un precio determinado.»

Tal disposición puede considerarse como antecedente de numerosas leyes que se han dictado en el país, buscando la solución al problema de los precios y al abaratamiento del costo de la vida.

Ya la ley 11.157, de 1920, fijaba precios máximos a las locaciones urbanas. La ley 11.210 reprime la coalición en el comercio, pactos o combinaciones por fusión de capitales. En el año 1939 se sanciona la ley 12.951, antecesora de la número 12.830, y más recientemente de la

14.440, cuyas reformas han sido tratadas en esta Cámara en la sesión del día de ayer.

Numerosos decretos legislan asimismo sobre tan importante problema. Estas leyes y decretos encomendaron a distintas reparticiones administrativas su aplicación. Tal el número 10.101/49 por el que se creó la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento, que debería vigilar el cumplimiento de la ley 12.830.

En 1950, por decreto 16.014, el Poder Ejecutivo delega en el Ministerio de Industria y Comercio las atribuciones conferidas por las leyes 12.830 y 12.983.

Posteriormente, se crean la Dirección Nacional de Abastecimiento, el Consejo Federal Coordinador del Abastecimiento y la Comisión Nacional de Precios y Salarios, dependientes del Poder Ejecutivo, mediante los decretos 12.182/51, 12.183/55 y 4.592/52, respectivamente.

No obstante todo lo expuesto, hasta el presente no ha sido eficaz el control sobre el agio y la especulación que cae en lo ilícito. Ello es debido a que las causas que producen aquellos fenómenos son variadas y complejas.

En el aspecto legal, podemos observar que los escasos medios con que cuentan los órganos administrativos encargados de la aplicación de las sanciones, hacen que se diluyan los buenos propósitos tenidos en cuenta por las autoridades.

Muchas veces las multas aplicadas no han intimidado a los comerciantes inescrupulosos, ya que es corriente que las bajas por aquel concepto han sido anticipadamente calculadas.

Es necesario, por otra parte, que los órganos competentes para sancionar las violaciones de leyes vigentes sean de carácter judicial y no administrativo. En este sentido, las últimas reformas entregaban el juzgamiento de aquellos casos a los jueces contenciosoadministrativos de la Capital Federal.

Inciden también en el fenómeno causas sociológicas y económicas. Entre las primeras, podemos mencionar la voracidad de muchos comerciantes que pretenden cimentar fortunas ponderables en el menor tiempo posible, avasallando, si el caso llega, principios de orden ético o jurídico. A ello debemos agregar que la población consumidora ha perdido la confianza en las soluciones que se han buscado para equilibrar el costo de la vida.

En cuanto a las segundas, alguien ha manifestado con precisión que las causas económicas específicas están íntimamente ligadas a aquella ley primaria de todos los fenómenos sociales: el principio hedonista del máximo de satisfacción con el mínimo de esfuerzo.

Si bien aquel principio no causa mayor gravamen en épocas de abundancia, resulta peligroso en momentos de crisis, lo cual hace necesario que el Estado controle el beneficio de los empresarios, hasta el momento en que los fac-

tores de perturbación desaparezcan mediante una real y eficaz política económica que haga posible el restablecimiento del libre juego de la oferta y la demanda.

El proyecto en consideración tiende a combatir en lo posible los factores enumerados, creando para ello, en la Capital Federal, un fuero especial integrado por jueces de agio y especulación, que entenderá, en primera instancia, en todas las denuncias e infracciones que se cometan. El fuero estará integrado por dieciocho jueces y por una Cámara de Apelaciones. Se determinan los requisitos que deben llenar sus componentes, como asimismo se fijan sus atribuciones.

Por otra parte, se consagra para los mismos la garantía de inamovilidad consagrada por la Constitución Nacional, sin perjuicio de lo cual la ley establece, en el segundo apartado del artículo 49, que la designación de los magistrados, funcionarios, etcétera del fuero, se extenderá hasta un término que no excederá de seis meses a contar desde la fecha del vencimiento de la vigencia de las leyes represivas del agio y la especulación. Tal disposición se justifica por la índole misma de las leyes del agio, que son esencialmente de emergencia, ya que pierden su eficacia cuando el equilibrio económico se restablece.

Se les fija a los tribunales una labor mínima de 18 horas diarias, en forma continua y durante todo el año. La división en turnos de los juzgados hará posible la recepción de todas las denuncias producidas. También se prevé el funcionamiento de un juzgado los días sábados, domingos y feriados con el propósito de acelerar en lo posible el procedimiento en los casos de urgencia o cuando el infractor se hallare detenido.

Se crea, asimismo, un ministerio público en representación de los intereses del fisco, y un ministerio de pobres y ausentes que garantice al presunto infractor el derecho de defensa.

Se establecen incompatibilidades entre la función de jueces de Cámara de primera instancia y secretarios, con el desempeño de profesión y oficio, excepcionándose el ejercicio de cargos docentes.

Con la sanción de esta ley, la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo, pasa a un fuero especializado, con lo cual se logrará una mayor eficacia en la aplicación de la ley del agio.

En cuanto al procedimiento a que deberán ajustarse estos tribunales en el juzgamiento de las infracciones y a la aplicación de las sanciones, ha entrado a esta Cámara un proyecto de ley que será tratado próximamente.

El gobierno se halla abocado a un plan orgánico que contemple el desarrollo económico del país mediante una política de industrialización inmediata, buscando atacar frontalmente la crisis económica. Pero mientras el saneamiento fi-

nanciero no se produzca, las situaciones de hecho deben encararse con medidas de emergencia que aseguren a la población un mínimo de equilibrio entre precios y salarios.

El Poder Ejecutivo busca tesonera y honestamente la armonía entre los productores y los consumidores, pero no puede privarse, frente al abuso desmedido, de atribuciones que le permitan luchar con eficiencia contra el encarecimiento del costo de la vida. El Parlamento, por otra parte, no ha sido insensible al reclamo popular, y en tal sentido ha sancionado leyes que protegen debidamente el interés de la colectividad, no obstante lo cual está abocado en estas últimas sesiones a la sanción de leyes y reformas necesarias de las existentes que permitan encarar con decisión la lucha contra la especulación y el agio.

El presente proyecto tiende a dotar a la Capital de la República de un órgano jurisdiccional competente y especializado que actúe en defensa del bienestar general que nos hemos propuesto llevar a cabo.

La necesidad de reprimir enérgicamente la especulación ilícita imponiendo sanciones ejemplares, la celeridad que debe darse al procedimiento y la conveniencia de adoptar medidas efectivas contra el alza artificiosa y desmedida, justifican plenamente la sanción del proyecto.

Por lo expuesto, solicito de la Honorable Cámara la sanción del mismo.

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Guido). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se hará la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

## 10

### PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE AGIO Y ESPECULACION

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión sobre procedimiento para los casos de agio y especulación.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Viscay). — (Leyendo):

#### Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre procedimientos para los casos de agio y especulación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

De acuerdo con el artículo 90 del reglamento del Honorable Senado, la comisión ha resuelto pasar este despacho directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 29 de septiembre de 1958.

J. Aníbal Dávila. — Bartolomé Pérez.  
— Rodolfo A. Weidmann.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados  
(Septiembre 18 de 1958)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Esta ley se aplicará para el juzgamiento de las infracciones a las leyes represivas del agio y la especulación que se cometan en la Capital Federal.

Art. 2º — Las disposiciones generales del Código Penal y del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal serán aplicables supletoriamente en cuanto no se opongan a la presente ley.

Art. 3º — Los infractores tendrán derecho a ser defendidos mediante asistencia letrada, pero si los mismos no la requirieran, el procedimiento seguirá su curso.

#### *Jurisdicción*

Art. 4º — La jurisdicción en materia de agio y especulación es improrrogable y será ejercida:

- a) Por los jueces de agio y especulación; y
- b) Por una Cámara de Apelaciones.

#### *Recusaciones*

Art. 5º — Los jueces de agio y especulación, sus secretarios, los camaristas, secretarios de cámara y fiscales no podrán ser recusados sin causa, y regirán para los mismos las causales de recusación y excusación establecidas en el libro I, título IV, del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal.

#### *Iniciación del procedimiento*

Art. 6º — Toda infracción da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio, o por simple denuncia verbal o escrita, ante las autoridades administrativas competentes, autoridades policiales o directamente ante el juez de agio y especulación.

#### *Acto de infracción*

Art. 7º — El funcionario que tome conocimiento de una infracción labrará de inmediato un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar claramente:

- a) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho reputado punible;

- b) La naturaleza y circunstancias del mismo;
- c) Nombre y domicilio del denunciante, cuando lo hubiere, y del imputado;
- d) Nombre y domicilio del presunto damnificado, si lo hubiere;
- e) Nombre y domicilio de los testigos que hubiesen tenido conocimiento del hecho investigado;
- f) Indicar la documentación y cualquier otro medio probatorio que guarde relación con la infracción;
- g) Todo otro elemento de juicio que se considere útil para la investigación del hecho;
- h) Constancia de la documentación y elementos que se secuestren;
- i) La disposición legal presuntivamente infringida; y
- j) El nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.

#### *Citación y emplazamiento*

Art. 8º — El funcionario que compruebe la infracción, citará y emplazará en el mismo acto al imputado para que comparezca ante el juez de agio y especulación dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la fuerza pública y que se considere su incomparecencia injustificada como circunstancia agravante. En el acto de la verificación se entregará al presunto infractor o a sus familiares, empleados y/o dependientes, copia del acta labrada.

#### *Efectos del acta*

Art. 9º — El acta tendrá, para el funcionario interviniente y demás efectos, el carácter de declaración testimonial y la alteración maliciosa de los hechos o de otras circunstancias que ella contenga, hará incurrir a su autor en las sanciones que el Código Penal impone a los que se producen con falsedad.

Art. 10. — Las actas labradas por funcionario competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 7º de la presente ley y que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor.

#### *Uso de la fuerza pública*

Art. 11. — En los casos en que la infracción sea, prima facie, de gravedad, exista reiteración o motivo fundado para presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, el funcionario interviniente podrá hacer uso o requerir el auxilio de la fuerza pública para la detención del infractor, debiendo comunicar esta circunstancia de inmediato al juez.

*Secuestro. Clausura provisoria*

Art. 12. — La autoridad interviniente podrá practicar el secuestro de los documentos y demás elementos probatorios de la infracción y disponer en el acto la clausura provisoria del local en que se hubiere cometido la misma, como así también del o los locales que tengan relación con el hecho comprobado. De todo ello dará cuenta al juez de inmediato, el que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas deberá expedirse sobre el mantenimiento o levantamiento de la clausura provisoria dispuesta.

*Elevación de actuaciones*

Art. 13. — Las actuaciones serán elevadas directamente al juez juntamente con los documentos y elementos probatorios secuestrados y los detenidos, si los hubiere, dentro de las veinticuatro horas de iniciadas. En caso de que el infractor solicite alguna medida urgente, el juez podrá requerir informes y aun la remisión de las actuaciones antes de expirar dicho plazo.

*Detenciones*

Art. 14. — En los casos del artículo 11 el juez deberá decretar la libertad o la prisión preventiva del imputado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de haber recibido las actuaciones y de haberse puesto a su disposición el infractor, por la autoridad interviniente.

Art. 15. — El juez, dentro de los tres días de recibidas las actuaciones en que no se hubiesen practicado detenciones, deberá pronunciarse sobre la conveniencia o no de disponer la detención del imputado.

*Impulso procesal*

Art. 16. — El procedimiento se impulsará de oficio. El juez podrá ordenar todas las investigaciones y medidas que estime necesarias para el mejor conocimiento de la verdad y la comprobación de los hechos.

*Términos*

Art. 17. — Todos los términos dispuestos por esta ley son perentorios e improrrogables.

*Juicio público y oral. Defensa*

Art. 18. — El juicio será público y el procedimiento oral. El juez dará a conocer al imputado los antecedentes contenidos en las actuaciones y le oírá personalmente invitándole a que haga su defensa y ofrezca y produzca la prueba en el acto. Sólo por excepción y en caso de necesidad el juez podrá fijar una nueva audiencia de prueba. Cuando el juez lo considere conveniente y a su exclusivo juicio podrá ordenar que se tome la versión escrita de las declaraciones, los interrogatorios y los ca-reos.

*Excepciones*

Art. 19. — La única excepción que se admitirá como previa es la de incompetencia de jurisdicción.

*Testigos*

Art. 20. — El imputado podrá ofrecer hasta cuatro testigos.

*Libros*

Art. 21. — Cuando en virtud de una norma legal o reglamentaria exista la obligación de llevar libros, registros o planillas especiales, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales o reglamentarias, incumbirá al acusado la prueba contraria para demostrar la regularidad de las operaciones.

*Peritos*

Art. 22. — Los peritos serán designados de oficio. Su número, según la índole del asunto, puede variar, a juicio del juez, de uno a tres por cada cuestión técnica sometida a decisión judicial.

Art. 23. — La designación se hará por sorteo entre los profesionales inscritos en la matrícula profesional respectiva y que figuren en el registro que prevé la ley de creación del fuero de agio y especulación, salvo que el juez estimara que la pericia deba realizarse por técnicos de la administración pública.

*Producción de la prueba*

Art. 24. — Los términos extraordinarios que se hagan necesarios para la producción de las pruebas sólo se admitirán como excepción y siempre que el hecho que se pretenda acreditar no pueda justificarse por otra clase de pruebas de más rápida producción.

Art. 25. — El juez podrá decretar el rechazo de la producción de pruebas que considere que no guardan relación con el hecho investigado.

*Sentencia*

Art. 26. — Oído el imputado y substanciada la prueba ofrecida en su descargo y toda otra que se hubiere ordenado, el juez dictará la sentencia correspondiente dentro del tercer día.

Art. 27. — El juez decidirá apreciando en conciencia la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica.

*Recursos*

Art. 28. — Podrán interponerse los siguientes recursos:

- a) Apelación;
- b) Nulidad; y
- c) Queja.

Art. 29. — Los recursos de apelación y nulidad sólo se otorgarán contra la sentencia definitiva y deberán ser interpuestos dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada personalmente o por telegrama colacionado.

Art. 30. — Los jueces deberán proveer sobre los recursos y remitir las actuaciones al superior, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido interpuestos.

Art. 31. — El recurso de queja podrá interponerse directamente ante la Cámara de Apelaciones cuando el juez deniegue alguno de los indicados en el artículo 29, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada la denegatoria o en el caso de retardo de justicia.

Art. 32. — El apelante podrá expresar agravios ante la Cámara de Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes de recibidos los autos. La Cámara podrá disponer medidas para mejor proveer y en todos los casos dictará sentencia dentro de los tres días de concluidas las actuaciones ante ella.

#### *Ejecución de sentencia*

Art. 33. — La ejecución de la sentencia y de las costas corresponde al juez que haya conocido en primera instancia.

#### *Notificaciones*

Art. 34. — Salvo lo dispuesto en el presente artículo, las providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley, los días lunes, miércoles y viernes y subsiguientes hábiles si alguno de ellos fuese feriado posterior a aquel en que hubiere sido dictado, sin necesidad de nota, certificado u otra diligencia. Se notificará personalmente o por telegrama colacionado en el domicilio del infractor o donde éste lo hubiere constituido legalmente, en los siguientes casos:

- a) El auto que disponga oír al infractor;
- b) La sentencia definitiva; y
- c) Las resoluciones que en cada caso indique el juez.

#### *Multas*

Art. 35. — El juez podrá conceder un plazo de hasta diez días, desde la notificación de la sentencia definitiva para que el infractor pueda pagar la multa impuesta. Vencido este término el juez podrá ordenar de oficio la ejecución de la sentencia.

#### *Cómputo de la pena*

Art. 36. — El tiempo de arresto o detención preventiva cumplido, se computará a los efectos de la pena impuesta.

#### *Sanciones disciplinarias*

Art. 37. — Los jueces y la Cámara de Apelaciones podrán imponer sanciones disciplinarias

de hasta cinco días de arresto y/o de hasta cinco mil pesos de multa, a los abogados, apoderados, procesados u otras personas, por ofensas que cometieran contra su dignidad, autoridad o decoro, o porque obstruyeren el curso del procedimiento. El arresto será cumplido en la dependencia que indique el juez o la Cámara.

#### *Registro de infractores*

Art. 38. — La Cámara de Apelaciones habilitará un registro especial de infractores a las leyes de represión al agio y la especulación, a los efectos del control de la reincidencia.

Art. 39. — En todos los juicios, los jueces deberán requerir, antes de dictar sentencia, informes sobre los antecedentes que del infractor obren en dicho registro.

Art. 40. — Derógase toda ley o disposición que se oponga a la presente.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ENRIQUE MARIO ZANNI.

Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.  
Sr. Pérez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Pérez. — Señor presidente: en nombre de la Comisión de Legislación General, me corresponde informar el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados que instituye las normas adjetivas a las que deberán ajustarse los procedimientos a seguir ante el fuero especial encargado de la represión del agio y de la especulación en la Capital Federal, recientemente creado.

Este proyecto de ley de procedimientos se caracteriza por el especial interés que reviste para el público consumidor, pues en sus prescripciones hallará el medio adecuado para defender eficazmente el justo precio de los bienes de consumo.

Como no podía ser de otra manera, también están particularmente interesados en el conocimiento y manejo de esta ley los sectores de la producción y el comercio directamente afectados al cumplimiento estricto de las leyes represivas del agio y la especulación, así como también, gran número de funcionarios, empleados y agentes de la administración pública y de la policía. Y es por todo ello, que se ha puesto especial cuidado en que sus disposiciones sean sencillas, claras y concisas.

Los principios capitales que informan todo el contenido de este cuerpo legal, pueden sintetizarse así: a) garantizar en forma amplia, a través de todas sus normas, la defensa en juicio de las personas y de los derechos, tal como está consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional; b) facilitar la investigación, mediante el establecimiento de un régimen ajustado en la

producción de la prueba, reconociendo el principio de la igualdad de las partes y una adecuada relación con el poder jurisdiccional; c) acelerar la marcha del proceso a los efectos de lograr lo más rápidamente posible una sentencia justa, suprimiendo formulismos carentes de finalidad.

Las garantías de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, a que acabo de hacer referencia, están aseguradas en varios artículos de este proyecto. Por el artículo 5º, se encarga la aplicación de la ley a jueces letrados, fijándose las mismas causales de recusación y excusación establecidas en el Código de Procedimientos Criminales de la Capital Federal; por el artículo 3º se garantiza la asistencia letrada, a requerimiento de los infractores; en el artículo 18 se establece el derecho del imputado a ser oído y de ofrecer las pruebas que corresponden a su defensa y descargo, y por el artículo 28 y siguientes, se conceden los recursos de apelación, nulidad y queja, que lo ponen a cubierto de los posibles errores en la primera instancia.

El artículo 7º se ocupa especialmente de las garantías de la investigación, enumerando en forma taxativa todos los requisitos que debe contener el acta de infracción. Esta prolija enumeración de requisitos se explica perfectamente, ya que el artículo citado va a ser el que más frecuentemente tendrán que aplicar los funcionarios públicos encargados del control y vigilancia en la vía pública, del cumplimiento de las leyes del agio y la especulación.

Por el artículo 16, con el propósito de lograr la rapidez en la investigación y llegar rápidamente a la sentencia, se establece el impulso de oficio del procedimiento, facultándose además al juez para ordenar todas aquellas medidas que estime conducentes para la comprobación de los hechos e investigación de la verdad.

En cuanto a las disposiciones tendientes a lograr la celeridad en el procedimiento, el proyecto dispone que todos los términos son brevísimos, perentorios e improrrogables, estableciéndose la oralidad del juicio, con lo cual se evita la formación de expedientes de dificultosa tramitación.

Otras disposiciones que persiguen el mismo fin son las del artículo 20, que limita a cuatro el número de testigos a ofrecer, en la inteligencia de que con ese número queda eficazmente garantizado el derecho de defensa del presunto infractor.

Con el objeto de simplificar los trámites en materia de notificaciones, el artículo 34 prescribe que todas las providencias quedarán notificadas por ministerios de la ley y sólo por excepción se notificará personalmente o por telegrama colacionado: a) el auto que disponga oír al infractor; b) la sentencia definitiva, y c) las resoluciones que en cada caso indique el juez.

A los fines del control de la reincidencia, el

artículo 38 establece que la Cámara de Apelaciones llevará un registro especial de infractores, y el 39 dispone que los jueces, antes de dictaminar sentencia, deben requerir informes sobre los antecedentes que del infractor obren en dicho registro.

Señor presidente: a través de este conjunto de disposiciones que he comentado en pocas palabras, el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, para el cual pido el voto favorable de mis distinguidos colegas, incorpora al cuerpo de normas procesales que rigen en la Capital Federal, un instrumento legal necesario, útil y de sencilla aplicación en la práctica, que permitirá una administración de justicia ágil y eficaz para las infracciones que se cometan a las leyes represivas del agio y la especulación. Nada más.

**Sr. Presidente (Guido).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Guido).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se hará la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

## 11

### PENSIONES

**Sr. Presidente (Guido).** — Corresponde tratar los despachos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en proyectos de ley, venidos en revisión o con modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados, acordando, prorrogando o aumentando pensiones. Por Secretaría se dará lectura de los respectivos despachos.

**Sr. Secretario (Viscay).** — (*Leyendo*):

#### Despacho de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado los proyectos de ley, venidos en revisión, por los que se acuerda pensión a:

Doña Regina Pacini de Alvear, doña Lucía María Stein de Ravignani, doña María Esther Fages de Pomar, doña María Teresa Arbeletche, doña Armanda Alvarez Escalada de Banash, doña Francisca Elisa Auli de Eyto, doña Matilde Roca, doña Margarita Molina de Cordero, doña Emilia Rosa Crespo de Mira, los menores Iliana Carmen y Edmundo Alfredo Segismundo Avalos Alurralde, doña Elena D. Reyes de Ruiz, doña María Anunciada Rocco de Fustet y a sus hijas solteras María Eva, Rosa Edith y Rochela Lily, doña Celia Raquel Sáenz, doña María Enriqueta Ceppi de Bonomi, doña María Rosa Malespina, doña Mercedes Cervera de Piaggio y a los menores María de las Mercedes,